

18ª SESION ORDINARIA DEL 12 DE JULIO DE 1886

Presidencia del Dr. Serú

SUMARIO—Asuntos entrados—Continúa la discusion pendiente sobre el dictámen de la comision de códigos en el proyecto de ley, en revision, sobre organizacion de los tribucales.

PRESENTES —En Buenos Aires, á 12 de julio de 1886, reunidos en su sala de sesiones los señores diputados inscriptos al márgen, y siendo las 2 y 25 p.m., el señor presidente declara abierta la sesion.

Presidente
Albarracin
Aleorta
Arauz
Araujo
Avellaneda

ACTA

—Se lee y aprueba, sin observacion, la de la sesion anterior.

Berdia
Barra
Bermejo
Bruchmann
Bustillo
Caceres
Calvo

ASUNTOS ENTRADOS

COMUNICACIONES OFICIALES

Poder ejecutivo de la Nacion.
Buenos Aires, julio 5 de 1886.

Al honorable congreso de la Nacion.

Usando de la autorizacion de la ley de 15 de octubre de 1883, el poder ejecutivo obtuvo del banco de la Provincia la cesion de la área de terrenos al sud de la ciudad, en los cuales se ha construido el arsenal de guerra y el edificio para hospital militar.

No obstante haberse decretado oportunamente el pago de esa compra, no ha podido verificarse, en razon de que el convenio de 26 de agosto de 1882, á que la ley lo afectaba, fué cancelado por haber sido cubierto

Paz
Padilla
Portela
Pino
Posse
Pujol Vedoya
Roca
Rodriguez
Ruiz de los Llanos
Sold
Solari
Soler
Sosa
Tagle
Yafre
Yramain
Zavalla
Zeballos
Zorrilla

totalmente el crédito que él importaba.

Faltando la imputacion legal para decretar el pago de estos terrenos, en cuya posesion está el gobierno hace tiempo, el poder ejecutivo tiene el honor de solicitar de V. H. la sancion del adjunto crédito á este objeto, al departamento de Guerra, por la suma fijada á la compra, y los intereses liquidados hasta esa fecha, todo segun se comprueba por el expediente relativo, que se remite agregado.

Dios guarde á V. H.

JULIO A. ROCA.

C. Pellegrini.

AUSENTES

CON LICENCIA

Teran
Torrent

CON AVISO

Acosta
Augier
Calderon
Gorostiaga
Leguizamón
Morán
Ruiz
Villagra
Vidal
Videla
Viso

SIN AVISO

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc., etc.

Art. 1º Abrese un crédito al departamento de la Guerra, por la suma de trescientos setenta y cinco mil quinientos veinte y tres pesos y setenta y un centavos m/n, (\$ 375.523.71 m/n) para abonar al banco de la provincia de Buenos Aires, la área de terrenos cuya adquisicion fué autorizada por la ley de 15 de octubre de 1883.

Art. 2º Comuníquese al poder ejecutivo, etc.

Pellegrini.

(A la comision auxiliar de presupuesto).

Carballido
Cano
Carbonell
Castro
Civilt
Colombres
Corvalan
Orespo
Dantas
Demaria
Estrada
Fernandez
Figueroa (F. J.)
Figueroa (M. A.)
Gallo
Garcia
Gil
Gomez
Goyena
Huidobro
Lainez
Leloir
Luro
Lubary
Malbran
Mansilla
Olmedo

Cabeza

Coquet

Ocampo

Riquelme

Vidal

Villamayor

próximo pasado.

(A la comision de poderes).

—El juez de seccion de la provincia de Córdoba remite los registros de la eleccion de un diputado nacional, practicada en aquella provincia, el 27 de junio próximo pasado.

(A la comision de poderes).

DESPACHO DE LAS COMISIONES

—Las comisiones de negocios constitucionales y de legislacion, se han espedido en las modificaciones del senado, al proyecto de reformas de la ley orgánica de la municipalidad.

(A la órden del día).

PETICIONES PARTICULARES

—La pensionista militar Carolina Ocampo, pide aumento de pension.

(A la comision de guerra).

—La señora Elvira Riglos de Ferreira, cobra haberes devengados por su padre, el teniente don Juan Riglos, y pide una pension graciable.

(A la comision de peticiones).

—La educacionista Aurora P. de Olascoaga, pide jubilacion.

(A la comision de instruccion pública).

—Manuel J. Rodriguez, comendador del convento de nuestra señora de la Merced, de la ciudad de la Rioja, pide una subvencion para concluir el edificio del templo de dicho convento.

(A la comision de instruccion pública).

—La pensionista militar Julia F. de Casanova, pide aumento de pension.

(A la comision de guerra).

ORDEN DEL DIA

ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES

Sr. Presidente—No habiendo mas asuntos entrados, se pasará á la órden del día.

Continúa la discusion pendiente sobre el proyecto de reformas á la ley de organizacion de los tribunales de la Capital.

Sr. Colombres—Pido la palabra.

No puedo, señor presidente, dejar pasar sin respuesta las observaciones formuladas en la anterior sesion por el señor diputado por Salta, respecto del artículo 1º que está en discusion.

Entiendo, que la suerte que corra este artículo va á ser decisiva para el resto del proyecto de la comision, y no quiero que la cámara vote bajo la sola influencia de los razonamientos, á mi juicio completamente equivocados, del señor diputado por Salta.

Si mi memoria no me es infiel, todos los argumentos del señor diputado pueden sintetizarse así: que los alcaldes, con la jurisdiccion limitada que hoy tienen, son resortes inútiles en el mecanismo de la administracion de justicia; que, por lo tanto, no procede la comision con acierto al establecerlos, en contra de lo proyectado por el honorable senado; que habria mayor conveniencia en extender su jurisdiccion hasta cien pesos, cambiando el nombre de alcaldes por el de jueces de paz; y que encontraba esto mas correcto, porque las espresiones de *juez de paz* y *juez letrado* se excluyen, hasta cierto punto, desde que aquel es un juez amigable, un juez de conciliacion, y no un juez de derecho.

Me parece que esta era su argumentacion.

Sr. Ruiz de los Llanos—Sí, señor.

Sr. Colombres—Quizá sea exacta la aseveracion del señor diputado por Salta, respecto de que los alcaldes son hoy día inútiles y de que podria prescindirse de ellos, sin inconveniente de ningun género.

Si no estoy equivocado, la excelentísima cámara de lo civil ha hecho ya indicaciones en este sentido al ministerio de Instruccion pública, pero es (entiéndase bien) sobre la base de la jurisdiccion actual de los jueces de paz, de suyo muy reducida.

Pero atendiendo al proyecto de la comision, no me esplico cómo puede considerarse inútil la existencia de los alcaldes, y, mucho menos, cómo se califica de desacertado el dictámen de la comision al abogar por su conservacion.

Si para ser juez de paz se exige la condicion de abogado con título universitario, si se estiende la jurisdiccion de paz hasta asuntos que sumen dos mil nacionales, no me esplico, francamente, cómo ha de considerarse inútil la existencia de funcionarios judiciales de muy inferior categoria, encargados de conocer en asuntos de ínfima importancia, que, por su propia naturaleza, no deben distraer la atencion de un juez letrado.

Pero, bien miradas, las observaciones del señor diputado por Salta se referian, no precisamente á los alcaldes en sí mismos, sino al nombre de tales que la comision les ha dado. Y tan es así, que el mismo señor diputado, á esos alcaldes, cuya inutilidad pregona, los encontraba perfectamente bien y hasta dignos de ser bautizados con el nombre de jueces de paz, sin mas que aumentarles cincuenta pesos nacionales en su jurisdiccion.

Y el señor diputado decia: De este modo tendríamos alcaldes dignificados. Pero olvidaba agregar que la justicia de paz queda rebajada, porque solo conoceria, en lo suce-

sivo, en asuntos de cien pesos nacionales, cuando en la actualidad conoce hasta de trescientos.

Y aquí, señor, voy á permitirme entrar en la parte que llamaré fundamental de las observaciones del señor diputado por Salta.

Lo declaro con toda ingenuidad: me siento maravillado cuando oigo hablar como de algo completamente antagónico, como de cosas que se repelen mutuamente, de esta dualidad de *jueces de paz letrados*, á que se refiere el proyecto de la comision; y tanto mas, señor presidente, cuando oigo hacer esta observacion por abogados distinguidos de nuestro foro, como es el señor diputado impugnador del proyecto.

Parece, señor, que se creyera que los abogados, cuando despues de largos sacrificios, obtenemos nuestro diploma de la universidad, lo hiciéramos únicamente para sacar una patente de juez de guerra, nunca para juez de paz.

Y digo esto, porque no encuentro absolutamente nada en que pueda basarse este antagonismo que se presenta entre las calidades de juez de paz y de juez letrado.

Yo abro los libros en que se estudia la justicia de paz entre nosotros, y no encuentro allí que lo característico de ella sea la ignorancia del derecho, el carácter de lego en la persona que ha de desempeñar el puesto, de manera que venga á escluirse á los conocedores del derecho, á los letrados, de desempeñar con ventaja este tan noble magisterio.

Lo único que encuentro, señor presidente, son cosas que mas bien se armonizan con el carácter de letrados que con el de legos.

Encuentro que lo que caracteriza á la justicia de paz, en primer lugar, es la menor cuantía del asunto en que interviene: es la justicia de los pobres; luego, el procedimiento que ha de emplearse, procedimiento simple, verbal y actuado, y cierta interposicion amistosa prévia, que el juez ejercita en interés de las mismas partes, sin perjuicio de que, fracasando esta iniciativa amistosa, el juicio se lleve adelante con todas sus consecuencias jurídicas.

He encontrado algo mas, estudiando este asunto, algo que revela la necesidad de que el juez de paz, lejos de ser un lego, sea una persona conocedora del derecho.

Los jueces de paz de la campaña de la provincia de Buenos Aires conocen hasta en juicios testamentarios cuyo monto asciende á ochocientos pesos nacionales. No estoy seguro de la exactitud de esta cifra, pero creo que entienden en asuntos hasta de veinte mil pesos del papel moneda corriente antiguo. Y es sabido que los juicios testamentarios no se pueden fallar ni se pueden

arreglar á ojos de buen cubero, con el criterio de un lego, en estas materias; sino que tienen que resolverse con arreglo á los principios de la legislacion civil y de las leyes de forma que rigen el punto.

Esta es la realidad de los hechos y esto es lo que encontramos entre nosotros, estudiando la justicia de paz, no solamente en su actualidad, sino tambien en su historia.

Por lo demás, esto de pensar en una justicia de paz completamente patriarcal, que sea algo como los arreglos que se nos dice hacen los curas de aldea en sus respectivas parroquias, que con su presencia acallan todas las pasiones; esto de pensar tambien en algo como un verdadero jurado en materia civil, en cuanto ha de fallarse puramente por conciencia, puede ser una aspiracion mas ó menos generosa, pero en la actualidad, no pasa de una mera fantasía, de un puro ilusionismo.

Luego, á mi juicio, no existe ese antagonismo á que se referia el señor diputado por Salta, porque si es indispensable el conocimiento del derecho para desempeñar las funciones de juez de paz, no veo porque razon haya de eliminarse, porque haya de escluirse para el desempeño de esa mision á los abogados, á los que tienen un título universitario.

De suerte que los alcaldes están bien en el punto en que los ha colocado la comision: como los funcionarios judiciales encargados de conocer de los asuntos de ínfima categoria; y los jueces de paz están del mismo modo perfectamente colocados.

He creido conveniente formular estas ligeras consideraciones, para dejar las cosas en su lugar, á fin de que la cámara no votara este asunto despues de haber oido, solamente, las objeciones que se han hecho al despacho de la comision.

Sr. Ruiz de los Llanos—Pido la palabra.

A pesar de la brillante impugnacion que acabo de oir de boca del señor miembro informante de la comision, en contra de las ideas que emití en la sesion anterior, yo mantengo, sin embargo, esas ideas.

Confieso que me ha estrañado escuchar esa impugnacion, habiendo tenido el honor, en la última sesion, de oír decir á algunos de los miembros de la comision, que ella no estaba distante de aceptar mi pensamiento respecto á esto que el señor miembro informante ha llamado simple cambio de nombres: el de alcaldes por el de jueces de paz.

Sr. Colombres—Supongo que no se refiere á mí.

Sr. Ruiz de los Llanos—No, señor. Si

me hubiera referido al señor diputado, lo habría dicho espresamente.

Sr. Gomez—No se referirá tampoco á mí.

Sr. Ruiz de los Llanos—Por esa razon suponía que no serian impugnadas mis ideas, en ese punto á lo menos. Pero puesto que lo han sido, y á nombre de la comision, creo conveniente contestar esplayándolas, puesto que tuve que espresarlas con suma brevedad en la sesion anterior, en razon de que tenia necesidad, cuando hablé por primera vez sobre este punto, de abarcar muchos tópicos.

Concretándome al punto: jueces de paz en vez de alcaldes, diré que creo que las consideraciones aducidas por el señor miembro informante no desvanecen las que yo aduje en sosten de mi tésis.

• Mi proyecto, de acuerdo con el que presenté en la sesion anterior, está tambien impreso, encontrándose allí las modificaciones que hago al de la comision. Los señores diputados han podido ver en qué difiere mi pensamiento del de la comision.

El señor miembro informante, ha empezado por decir que, efectivamente, los alcaldes actuales son inútiles por lo ínfimo de su jurisdiccion; pero me parece que no es consecuente cuando no reconoce que los alcaldes creados por el proyecto de la comision, son tan inútiles como aquellos.

Sr. Colombres—No son los mismos alcaldes.

Sr. Ruiz de los Llanos—La ley orgánica vigente crea alcaldes con jurisdiccion hasta 30 pesos.

Sr. Colombres—Hasta 50.

Sr. Ruiz de los Llanos—Hasta 30.

Sr. Colombres—Tengo aquí la ley y dice: «Los alcaldes conocerán en todas las causas que no escedan de 50 pesos.»

Sr. Ruiz de los Llanos—Y el despacho de la comision ¿qué establece?

Sr. Colombres—La misma suma.

Sr. Ruiz de los Llanos—Mas en mi abono.

Quiere decir que estaba equivocado solamente en cuanto á la cantidad.

El señor diputado empieza por reconocer que los alcaldes actuales son inútiles por lo ínfimo de su jurisdiccion; y mientras tanto, sostiene que son utilísimos los mismos alcaldes con jurisdiccion hasta 50 pesos, tal cual existen hoy. Me parece que esto es contradictorio.

El señor diputado encontraba en mí inconsecuencia, cuando sostenía la inutilidad de estos alcaldes y la conveniencia de estos jueces de paz con jurisdiccion hasta solo 100 pesos. Olvidaba, sin embargo, que entre 50 y 100 hay la diferencia que entre uno y dos; olvidaba que duplicar la jurisdiccion no es aumentarla insignificadamente, pues la dife-

rencia es de un ciento por ciento; descuidaba tambien que, al esponer mis ideas á este respecto, manifesté claramente que mi propósito era dejar subsistente estos funcionarios, con jurisdiccion limitadísima, para asuntos de ínfima cuantía, distinguiéndolos de los otros, que son tambien de ínfima cuantía; estos funcionarios al alcance de los pobres, como decia el señor diputado con mucha razon, que van á hacer justicia en las cuestiones pequeñas. Si me ha parecido necesario darles el carácter de jueces de paz, es para que, al mismo tiempo, tengan todas las demas funciones que nuestra ley electoral atribuye principalmente á estos funcionarios.

En la rápida relacion que de los argumentos espuestos, hizo el señor miembro informante, omitió un punto esencial: que las leyes de elecciones suponen la existencia de jueces de paz,

Si suprimimos los jueces de paz simples ciudadanos, para crear en su lugar jueces de paz letrados con jurisdiccion hasta dos mil pesos, damos intromision en asuntos puramente electorales, á jueces letrados cuya jurisdiccion vá hasta dos mil pesos, que no son ya los mismos funcionarios que ha supuesto la ley de elecciones. Y esto me parece perfectamente inconveniente...

Sr. Colombres—Si me permite...

Yo consideraría mucho mejor garantidos mis derechos políticos, poniéndolos bajo la salvaguardia de un abogado, con título universitario, nombrado por el presidente de la República previo acuerdo de la cámara de lo civil, que no poniéndolos bajo la proteccion de un teniente alcalde, nombrado, á propuesta de la municipalidad, por el poder ejecutivo.

Sr. Ruiz de los Llanos—Yo no he propuesto tenientes alcaldes.

Sr. Colombres—Convierte á los alcaldes en jueces de paz,

Sr. Ruiz de los Llanos—De manera que recojo la alusion y repito que no hago jueces de paz de los tenientes alcaldes.

Sr. Colombres—Quite lo de *tenientes*.

Sr. Ruiz de los Llanos—Exijo en mi proyecto para los jueces de paz la calidad de propietarios en la parroquia donde tengan que ejercer sus funciones; les doy jurisdiccion hasta cien pesos, limitando solamente esa jurisdiccion respecto de los funcionarios actuales. Y me parece que los funcionarios actuales no sufrirían ningun desdoro interviniendo en las funciones electorales.

Sr. Colombres—Yo tampoco creo eso.

Sr. Ruiz de los Llanos—El señor diputado, tomando de mis palabras algo referente á la oposicion que yo encontraba entre jueces de paz y jueces letrados, manifes-

taba que no existia la contradiccion, que no existia la antitesis entre los unos y los otros.

Yo no lo he sostenido, señor presidente. He manifestado simplemente que el juez de paz era, por su naturaleza, juez de conciliacion; que el juez de paz, por el alcance de su jurisdiccion, debia de ser juez que resolviese segun su conciencia, mas que segun su ciencia. No he dicho tampoco que esté reñida la calidad de juez de paz con el carácter de letrado para desempeñar las funciones de tal cargo.

Dije, si, que no debe ser una exigencia indispensable de la ley la calidad de letrado para desempeñar esta clase de funciones, porque desde que no se les exige la sumision á las leyes de procedimiento, desde que no se les exige una observacion rigurosa del derecho, tanto en el fondo como en la forma, no debia exigírseles tampoco la calidad de letrados; pero no he dicho, vuelvo á repetir, que estuviese reñido el carácter y las funciones del juez de paz con el carácter y las funciones del letrado.

Conozco perfectamente que en el sistema actual que tenemos ha habido jueces de paz, cuyo nombre podria citar, que han sido letrados y que han desempeñado perfectamente sus funciones, mucho mejor, indudablemente, que los no letrados.

Pero hacer una exigencia de esta calidad para funcionarios de un orden tan ínfimo como los que indicaba yo, me parece que seria altamente inconveniente.

Este punto está necesariamente ligado con el segundo punto en que difero de la comision.

La comision crea catorce alcaldes y establece catorce jueces de paz letrados, con jurisdiccion hasta dos mil pesos.

Cuando yo he propuesto estos simples jueces de paz, un poco superiores á los alcaldes, aunque inferiores á los actuales jueces de paz, con jurisdiccion hasta cien pesos, he pedido inmediatamente la disminucion en el número de los jueces de paz letrados, llamándolos jueces de distrito.

Para este segundo punto parece que me asisten sobradísimas razones, que me bastaria esponer ante la cámara.

Ocurren estas circunstancias, que estan al alcance de todo el mundo: actualmente funcionan para todos los asuntos comerciales y civiles, sin limitacion de jurisdiccion, solo seis jueces en la Capital, cuatro en lo civil y dos en lo comercial. Estos cuatro jueces en lo civil y estos dos en lo comercial conocen, vuelvo á decirlo, de todo asunto comercial ó civil, cuyo monto pase de trescientos un pesos hasta el infinito, cualquiera que sea el monto del asunto. Estos jueces—lo ha reconocido categóricamente el señor

miembro informante de la comision, respondiendo á la observacion mia—no están recargados.

¿Cómo es, entónces, que se quiere establecer catorce jueces de paz para solo conocer en asuntos desde cincuenta y un pesos hasta dos mil, funcionando diariamente?

Ese personal estaria materialmente ocioso; y es precisamente para responder á la inutilidad de estos catorce jueces de paz letrados, que yo observé que deberíamos establecer los jueces de paz con jurisdiccion mas pequeña todavia; poniendo como intermediarios entre ellos y los jueces de primera instancia, los funcionarios que he llamado jueces de distrito.

Habia propuesto siete, y, debo decirlo ya que me ocupo de este asunto, lo hice porque me encontraba con dificultades, en el primer momento, para dividir catorce parroquias entre cinco ó entre tres de estos funcionarios.

Pero en el proyecto impreso, que se ha repartido á todos los señores diputados, se ha salvado esta dificultad, y, si llegara el caso, todavia propondría que se redujeran á tres, haciendo un distrito de cuatro parroquias y dos de cinco.

Me parece que si seis jueces atienden, sin estar recargados, á todos los asuntos civiles y comerciales, con jurisdiccion ilimitada, tres jueces pueden atender perfectamente todos los asuntos civiles y comerciales desde 100 hasta 2000 pesos.

Sr. Colombres—Me permite una interrupcion?

Yo no habia conocido la estadística judicial que aparece en la última memoria pasada por la cámara de lo civil, y segun la cual uno solo de los jueces de primera instancia asegura tener pendientes once mil y tantos asuntos.

Si esa estadística es inexacta, no lo sé; pero eso es lo que asegura uno de los señores jueces, que creo es el doctor Bustos.

Sr. Ruiz de los Llanos—Me parece que en esa estadística debe haber uno ó dos cerros demás, porque me consta que los jueces no están recargados.

Sr. Colombres—No sé si mi honorable colega el señor diputado Posse recuerda cuál es el juez á que me refiero.

Sr. Posse—No lo recuerdo.

Sr. Ruiz de los Llanos—Serán asuntos rezagados, de los de la provincia de Buenos Aires, que han quedado detenidos porque no hay quien los atienda.

Sr. Colombres—Le doy el dato que viene en la memoria de la cámara de lo civil: once mil doscientos y tantos asuntos.

Sr. Ruiz de los Llanos—Los otros datos

son exactos. Puede haber en estos una equivocacion de uno ó dos ceros.

Sr. Colombres—Es una publicacion oficial; está en la memoria del ministerio de Justicia.

Sr. Ruiz de los Llanos—Pueden equivocarse en las publicaciones oficiales.

Antes de concluir, debo recordar que el señor diputado por Buenos Aires, miembro de la comision, habia hecho, en la sesion anterior, la indicacion, que me parece muy conducente, de que en lugar de ocuparnos de esta ley articulo por articulo, la discutamos capítulo por capítulo, al menos en estos capítulos sobre los cuales hago observaciones.

Creo que no habia llegado el caso de considerar esta indicacion, y me permito rogar al señor diputado por Buenos Aires que la repita, á efecto de hacer más ordenada la discusion.

Sr. Demaria—Perfectamente.

El señor diputado puede repetirla.

Sr. Ruiz de los Llanos—Yo rogaba al señor diputado que la reprodujese porque no quería hacer mia una indicacion que ya habia hecho él.

Sr. Demaria—No tengo inconveniente en repetir la indicacion que hice.

Sr. Presidente—El señor diputado solicitaba que la votacion se hiciese capítulo por capítulo?

Sr. Demaria—Que recayera, primero, una votacion sobre cada capítulo, antes de entrar en particular á ellos; sin perjuicio de las modificaciones que se pudiera hacer despues.

Sr. Presidente—Si no hay oposicion por parte de algun señor diputado...

Sr. Ruiz de los Llanos—Respecto de este capítulo, como he impugnado el título «De los alcaldes,» para sustituirlo por el «De los jueces de paz,» me parece que la votacion del título decidirá del resto.

Sr. Figueroa (F. J.)—Pido la palabra.

Si me permite el señor diputado por Buenos Aires, voy á hacer una indicacion. Y es que, para que fuera más ordenado el debate y siguiera este proyecto la tramitacion que debe seguir, se tratara el artículo primero.

Tanto el proyecto de la comision como el del senado y el que ha presentado el señor diputado por Salta, principian por lo siguiente: «La administracion de justicia, en la capital de la República, será desempeñada por las autoridades siguientes:» Despues el proyecto de la comision dice: «alcaldes, jueces de paz, cámaras de paz,» etcétera.

Por consiguiente, creo que lo más ordena-

do seria votar el artículo primero hasta la palabra *alcaldes*....

Sr. Ruiz de los Llanos—No está en discusion el artículo primero. Por resolucion de la cámara, se ha suspendido para despues lo demás.

Sr. Figueroa (F. J.)—No he concluido.

Conozco el reglamento. Voy á pedir reconsideracion de esa sancion, y que la cámara vote el artículo primero, hasta las palabras que he indicado y, despues, que vaya votándolo parte por parte. Primero, los alcaldes, si acepta que haya alcaldes; despues, jueces de paz, etcétera. Y una vez votados cuáles son las clases de autoridades que formarán la administracion de justicia, vendrán los títulos y capítulos á determinar las funciones, condiciones y responsabilidades de esos funcionarios.

Paréceme que esto es lo correcto. De consiguiente, formulo la mocion de reconsideracion, indicacion que corresponde á la misma del señor diputado por Buenos Aires.

—Apoyado.

Sr. Ruiz de los Llanos—Yo creo que no es necesario hacer mocion de reconsideracion para esto.

La mocion que se hizo fué para que se suspendiera este asunto hasta despues de haber considerado tal ó cual otro. Ahora se pide que entremos á discutir el artículo primero, para votar por partes.

Sr. Figueroa (F. J.)—No es el artículo, sino los títulos.

Sr. Presidente—Si me permiten?...

La cámara ha resuelto suspender este punto, para continuar la discusion sobre los subsiguientes.

El señor diputado repite en esta sesion una mocion de orden para que la cámara se ocupe del artículo primero.

Está en discusion la mocion hecha por el señor diputado por Córdoba.

—No pidiénd... palabra, se vota si se acepta ó se rechaza la mocion, y resulta afirmativa.

Sr. Presidente—Está en discusion el artículo primero.

Sr. Figueroa (F. J.)—Creo que tengo derecho, de acuerdo con la sancion de la cámara, á pedir que se ponga en discusion el principio del artículo, hasta la palabra: *alcaldes*, recien viene despues la divergencia entre los señores diputados, y poner en discusion en seguida cada uno de estos títulos de funciones.

Sr. Ruiz de los Llanos—Pido la palabra.

He tenido el honor de presentar un artículo en reemplazo del que se acaba de poner en discusion, y pediria, en uso del derecho que me acuerda el reglamento, que el señor secretario lo leyese.

—Se lee.

«La administracion de justicia en la capital de la República será desempeñada por las autoridades siguientes: jueces de paz, jueces letrados para asuntos de menor cuantía, jueces de mercado, jueces letrados para asuntos de mayor cuantía, cámaras de apelacion y demás funciones que en esta ley se determina.»

Sr. Ruiz de los Llanos—Los fundamentos de este artículo, los he espuesto ya varias veces, y no necesito repetirlos.

Como, segun el reglamento, en caso de desecharse el artículo propuesto por la comision, la cámara deberá resolver si trata inmediatamente el que he propuesto ó si pasa á comision, llegará entonces el momento en que pueda discutirse parcialmente, si, como no lo creo probable el artículo de la comision fuese desechado. Pero puesto que presento el mio en reemplazo del que presenta la comision, puedo agregar á lo ya manifestado, que el artículo como lo propongo supone la supresion de los alcaldes y su reemplazo por jueces de paz; supone el reemplazo de los jueces de paz letrados ideados por la comision, por jueces de distrito cuyo número sería muy reducido; supone la supresion completa de las cámaras de paz, y supone, por fin, la apelacion de las resoluciones de los jueces de distrito, ante los jueces de primera instancia.

Acabo de esponer las razones por las cuales creo son preferibles los jueces de paz con jurisdiccion hasta cien pesos, á los alcaldes; acabo de esponer bien las razones que tengo para creer que los jueces de distritos reemplazarían con ventaja esta lujosísima administracion de justicia en asuntos de menor cuantía...

Sr. Colombres—Muy barata!

Sr. Ruiz de los Llanos—No tan barata! Por cierto, no tan barata!

Sería reemplazada con ventaja, decía, por cinco jueces de distrito... y aún por tres, como me inclinaría á proponerlo despues de la meditacion que he podido dedicar á este asunto. Que fueran simplemente tres, en lugar de cinco.

En cuanto á la supresion de las cámaras de paz, me parece que ella se funda por sí misma: si es lujoso de suyo tener catorce jueces de paz letrados para conocer solo de asuntos civiles y comerciales cuyo monto se estiende hasta dos mil pesos, es mucho mas lujoso y exorbitante tener dos cámaras de

apelaciones tan solo para esos asuntos. Esto sería sumamente caro.

Son estos (no quiero fatigar á la cámara) los fundamentos que tengo para proponer este artículo en reemplazo del de la comision.

Sr. Posse—Pido la palabra.

Probablemente el señor diputado se ha referido á mí, cuando ha dicho que uno de los miembros de la comision le habia manifestado no estar distante de aceptar su plan en reformas á la ley orgánica de los tribunales de la capital.

Sr. Ruiz de los Llanos—En el punto referente á jueces de paz, efectivamente me he referido al señor diputado.

Sr. Posse—Es exacto que tuve con el señor diputado por Salta una conversacion, manifestándole la necesidad, la suprema necesidad, de reformar la ley orgánica de los tribunales de la Capital, á fin de que en este país hubiese justicia pronta y económica, puesto que con razon se queja todo el mundo de que la justicia se administra, con mucho retardo, y de que la justicia de paz se administra, no solo con mucho retardo, sino con poca integridad.

Le decía que ante esta necesidad tan suprema no estaría distante yo, por vía de transaccion, de aceptar algunas de sus ideas, por ejemplo, el nombre de jueces de paz que que quiere dar á los alcaldes.

Me parece que porque se llamen jueces de paz ó alcaldes no se vá á cambiar la naturaleza de la institucion, como un hombre no cambia su personalidad porque se llame Pedro ó Antonio.

Si el señor diputado encuentra buenos estos jueces con una jurisdiccion limitada, no sé porqué le parece malo que se llamen alcaldes, y bueno que se llamen jueces de paz.

Y en la cuantía hasta donde su jurisdiccion puede llevarse, las observaciones del señor diputado tienden tambien á limitar á 1,000 pesos la jurisdiccion de los jueces letrados que, con el nombre de jueces de paz, habia proyectado la comision.

No he tenido el gusto de escuchar al señor diputado una sola razon, ni buena ni mala, ni chica ni grande, en apoyo de esta opinion.

La estructura del proyecto de la comision obedece á un plan estudiado, meditado, calculado en datos estadísticos exactos.

«La comision tenia este problema á resolver: ¿cómo se hará la justicia en la Capital, pronta y rápida, en vez de lenta y pesada, hasta el punto de que se fulminan hoy contra ella justas reclamaciones? Habia dos maneras: si la carga era pesada, aumentar el

personal que la ha de soportar, ó disminuir el peso mismo de la carga.

En dónde se hacia sentir mas el recargo, era en la cámara de apelaciones de lo civil y en los juzgados de primera instancia.

Teníamos, entónces, que optar, ó por crear una nueva cámara y aumentar el número de los jueces de primera instancia, ó por aligerar esa carga que pesa sobre estos funcionarios.

La comision ha creído que la carga que daba soportable, fácil de llevar, con la creacion de la justicia de paz letrada, con jurisdiccion hasta 2000 pesos.

La razon que convencerá á la cámara de que la comision ha procedido con acierto, se basa simplemente en datos estadísticos.

Nuestro proyecto rebajará el trabajo de los jueces de primera instancia en mas de un treinta por ciento, probablemente en un treinta y cinco ó cuarenta por ciento.

Tres jueces, al principio, me decian que calculaban, sin mucho meditar sobre ello, en un veinte por ciento el alivio de su trabajo. Otro juez, el doctor Bustos, me decia: Calculo que se nos rebaja el trabajo lo menos en un treinta por ciento, numéricamente considerado; pero si se tiene en cuenta la clase de causas, molestas, que se nos quita, porque son causas de poca cuantía, en que no intervienen abogados que las ilustren y sí procuradores que las embrollen, calculo la disminucion del trabajo en un cuarenta por ciento.

He ido personalmente á la cámara de justicia á pedir á mis antiguos y buenos compañeros que se tomasen el trabajo de darme datos estadísticos exactos de las causas que ante ellos penden, y resulta que de 880 causas, se les quita 212, es decir, casi un veinticinco por ciento.

Si á la cámara se le quita un veinticinco por ciento, es fuera de duda que á los jueces de primera instancia se les quita mucho mas de un treinta por ciento, porque tienen las apelaciones de los actuales jueces de paz en la capital.

Tenemos, ademas, datos estadísticos de que la cámara de lo civil—apesar de que los miembros que la componen no lo creen así, acobardados sin duda por el trabajo—podrá marchar con bastante holgura.

Las memorias de ese tribunal nos demuestran que en el año, comparando el número de expedientes despachados con los entrados, le queda un saldo de cien expedientes. Pero como le vamos á quitar doscientos y tantos, resultará un saldo á su favor de ciento y tantos.

De modo que quedando este saldo á favor de la cámara, gradualmente podrá terminar

algunos expedientes que están sin fallar desde la época en que esta ciudad era de la provincia de Buenos Aires; y si todavia se dijera que esos expedientes retardados desde aquella época, gravitando sobre la cámara de lo civil, entorpecerian su trabajo ordinario, podría compartirse ese despacho con la cámara de lo comercial, que está al día y que va á quedar mucho mas descansada con el veinte y cinco por ciento menos de trabajo.

El señor diputado por Salta decia que proyectábamos una administracion de justicia lujosa. No sé en que sentido la juzga así.

Sr. Ruiz de los Llanos—Costosa, cara.

Sr. Posse—Se equivoca el señor diputado. La comision puede presentar datos aritméticos (los mas convincentes: los números) de que el Estado no va á gastar mas de mil nacionales al mes, dejando todavia á los jueces de primera instancia profusamente dotados de empleados.

Debo tambien manifestar antes de concluir, que los jueces de primera instancia me han dicho que quedarán sin el personal suficiente si les disminuimos un secretario, como lo propone la comision. Cumplio el encargo, que me han hecho, de manifestarlo así ante la cámara; pero tambien voy á cumplir una exigencia de mi conciencia: creo que los señores jueces se equivocan. Tienen un personal sobradamente abundante á su servicio, un personal que, por lo general, no cumple con su deber.

En esta cámara hay muchos abogados (yo soy uno de ellos) que no han tenido el placer de ver á ningun secretario haciendo notificaciones. Hacen notificaciones falsas, por medio de niños, ó bien diligencias que no están estampadas en el expediente, pues despues de firmadas llenan recien el blanco que han dejado para estenderla.

Algo analogo sucede con los embargos que se manda practicar. Jamás los autoriza el secretario actuario, sino otros escribanos que hay en esas secretarías, que tienen el título de tales, pero no el cargo público que los habilite para autorizar tales embargos, y no obstante, son ellos quienes los practican, cobrando honorarios por esas diligencias, cuando se sabe que el que tiene el título de escribano no es depositario de la fé pública hasta tanto no recibe el nombramiento oficial. A pesar de esto, ellos van á autorizar esos embargos. ¿Para qué? Para cobrar honorarios. Porque dicen: Esta diligencia no la practico como oficial primero de la secretaría, sino como escribano; por consiguiente, tengo el derecho de cobrar honorarios.

Hay, como he dicho antes, muchos abogados en esta cámara, y creo que no habrá uno solo que no sea sabedor de lo que manifiesto.

Bien, pues; si á los jueces de primera instancia se les disminuye el treinta y cinco por ciento de quehacer, es decir, la tercera parte, se les deja un personal demasiado abundante suprimiéndoles solamente la sexta parte de él. Tienen seis secretarios y se les quita uno.

El señor diputado por Salta decia que esta administracion seria lujosa, en el sentido de que seria cara.

Repito que, tomando en cuenta lo que actualmente se gasta en ochenta alcaldías, veinte juzgados de paz y seis secretarías con sus empleados correspondientes, la justicia de paz tal como la propone la comision solo costaría unos mil pesos mas.

Ahora, me permitiría preguntar al señor diputado, qué datos tiene para creer que tres jueces de paz son bastante para desempeñar pronta y rápidamente esta justicia de paz, que es la que debe ser mas amparada y protegida por el congreso, porque es la justicia de los pobres.

Segun mis datos, en cada juzgado de paz de los veinte de la Capital tramitan trescientos y tantos expedientes por año. Suponiendo que no fueran mas que trescientos, serian seis mil entre todos.

¿Puede creerse que cada juez de paz despache mil expedientes por año, o dos mil expedientes por año, siendo tres como propone el señor diputado? Es absolutamente imposible.

Los que somos abogados, que conocemos el peso inmenso que representa esta masa de expedientes, podemos con conciencia tranquila decir que no ha nacido el hombre capaz de desempeñar la décima parte de esa tarea.

Señor presidente: en un país donde una causa dura mas de un año, puede decirse que no hay justicia. La justicia tiene que ser ilustrada, rápida, imparcial y barata.

Hemos visto, y dolorosamente lo digo por experiencia propia que he recogido en el tiempo en que yo he sido juez, hemos visto, repito, causas que han durado veinte y cuatro años, causas iniciadas en estas condiciones: una deuda que constaba de un documento público é hipotecario.

Recuerdo que les decia á mis compañeros, sarcásticamente: en el tiempo que va corrido, los litigantes han podido casarse, tener hijos y estos hacerse abogados para defender el pleito.

Esto no es justicia.

Entonces, si es cierto que tiene cada juez de paz trescientos y tantos expedientes al año, cuando su jurisdiccion está limitada á trescientos pesos, ¿cuántos tendrá cuando se eleve á mil pesos, como quiere el señor

diputado, ó á dos mil, como propone la comision?

Es, pues, fuera de duda que en vez de trescientos, serán quinientos los expedientes que pesarán sobre cada juez.

Y ¿créese el señor diputado que con tres jueces vá á hacerse el despacho pronto? Es absolutamente imposible.

Ademas, hay que tener en cuenta que la ciudad de Buenos Aires crece de una manera que á todos asombra; que sus necesidades cada dia son mayores; y que naturalmente, aumentando su poblacion y su comercio, las causas litigiosas tienen que multiplicarse. Y no es posible estar á cada rato haciendo leyes,—que serian como un verdadero remiendo á esta ley,—alterando las circunscripciones de los juzgados de paz.

Si pues, la nacion no va á gastar sino, cuando mucho, mil pesos mas de lo que ahora gasta en la justicia, y si le damos una justicia de paz letrada, no para asuntos de menor cuantia, porque la cantidad no es lo que debe mirarse, porque si bien el pobre litiga por poco dinero, quizá de ese poco dinero depende el porvenir de su familia; si vamos á hacer la justicia de mayor cuantia rápida, puesto que vamos á quitar á los jueces un treinta y cinco por ciento del trabajo actual; si vamos á dejar á las cámaras de apelacion, que son tardias, con mucho mayor desahogo, para que las causas criminales no sufran retardo, para que el pobre encarcelado, si es inocente, salga inmediatamente en libertad; si vamos á quitar á las cámaras de lo civil el veinte y cinco por ciento de su jurisdiccion para dejarlas en condiciones de administrar justicia rápida, gastando solamente mil pesos mas que hoy, es inconcebible que un representante del pueblo diga que esa administracion es lujosa y cara! Es barata, es económica, señor presidente!

La comision defiende, pues, la estructura creada por su proyecto, porque responde á esto: á dar al pueblo una justicia ilustrada, rápida y barata; y responde á dar á los acudados una justicia igualmente pronta y rápida, tanto en primera como en segunda instancia.

He visto en algunos diarios la observacion de que las cámaras de paz son una creacion flamante, una novedad.

Señor! siente uno vergüenza de qu'en la prensa de esta ilustrada capital se haga semejante argumentol ¿Qué acaso todo lo nuevo es malo, ó que por ser nuevo debe ser malo?

Entonces el mundo no marcharía, no progresaría!

Pero debo confesar que la comision no reivindica para sí el honor de la invencion,

Encontramos en la legislación del mundo muchas instituciones semejantes.

Los Estados-Unidos cuentan treinta y ocho millones de habitantes, y tienen solo una corte suprema. ¿Qué han hecho para que esa corte suprema no esté aplastada por la inmensa cantidad de expedientes que irían á buscar resoluciones á ella? Han creado cortes de circuito, cortes intermediarias; de manera que los asuntos de cierta entidad fueran los únicos que pudieran reclamar resoluciones de la suprema corte.

Nuestro país progresa notablemente, y es probable que mañana tengamos que ocurrir al mismo remedio, á crear cortes de circuito, para no abrumar á la suprema corte con todos los asuntos que vayan en apelacion de los juzgados de seccion.

Esta es la institucion que hemos aplicado á la justicia de la Capital: crear estas cámaras intermediarias. ¿Para qué? Para que no vayan asuntos de quinientos pesos á distraer la atencion de las cámaras superiores, conservándolas por este medio para lo que pueden y deben conservarse; para la unidad de la jurisprudencia.

Señor presidente, no voy á insistir en hacer demostraciones, despues del luminoso informe con que ha sido apoyado el dictámen de la comision; pero declararé, como ya lo he hecho, que á este proyecto le hemos dedicado detenido estudio y meditacion, apoyándonos en datos estadísticos prolijamente comprobados.

He dicho.

Sr. Ruiz de los Llanos—Pido la palabra.

El señor diputado que ha impugnado mis ideas ha empezado por echar de menos todo fundamento de mi parte para limitar la jurisdiccion de los jueces de distrito á mil pesos, diciéndo que no ha tenido el honor de oír una sola razon de mí á este respecto.

Creo que no necesitaré grande esfuerzo para demostrar que no es antojadiza mi proposicion.

Bastaria para justificar esta limitacion, el hecho de estar sancionado por el senado que los jueces de paz letrados no conocerán sino hasta mil pesos.

Pero hay razones de mayor peso aunque justifican esta limitacion hasta solo mil pesos. Mi argumentacion ha partido de la base suministrada por la comision misma.

La comision ha reconocido esplicitamente que el *recargo*, propiamente tal, no existe en los jueces inferiores, en los de 1ª instancia.

Sr. Posse—Si existe, señor diputado.

Sr. Ruiz de los Llanos—El señor miembro informante ha hablado á nombre de la comision, y ha dicho: No hay recargo.

Sr. Posse—La comision ha dicho que los

jueces tienen once mil expedientes á su estudio. Al señor diputado, que es abogado, le basta ese dato para que comprenda que, segun el miembro informante, están abrumados de asuntos los jueces.

Sr. Colombres—He hecho la rectificacion del caso en la sesion de hoy. He hablado de once mil y tantos expedientes...

Sr. Ruiz de los Llanos—Sabia perfectamente, antes de que lo dijera la comision, antes de que lo rectificara y lo volviera á rectificar, que el recargo existe. Es cierto que es preciso que los jueces trabajen, no solo en las horas de despacho, sino en su propia casa para estar al día; pero sé tambien que están al día.

Entónces, pues, yo he buscado el remedio á esta lentitud, que es el gran clamor de esta sociedad, en materia de administracion de justicia; y he buscado el remedio allí donde está el mal. No he ido á crear jueces letrados y cámaras de paz, porque eso no remedia nada, porque eso segun la comision, solo disminuye á la cámara de lo civil, que es la recargada, que es la que motiva el clamor, un veinte y cinco por ciento de su trabajo, que no es bastante, siendo necesario quitarle mas de la mitad del trabajo que actualmente tiene, para lo cual hay que recurrir á otro remedio: establecer dos cámaras.

Sr. Colombres—Pero quitarles la mitad del trabajo, seria dejarles sin tener qué hacer, señor diputado!

Sr. Ruiz de los Llanos—[Estraña interrupcion la del señor diputado, que con las palabras vehementes que acaba de oírse sostiene que son necesarios catorce jueces letrados que han de funcionar exactamente como los jueces de primera instancia actuales, para conocer de asuntos desde cincuenta y un pesos hasta dos mill]

Y aquí contesto á esta parte, que es la que me obliga á tomar la palabra, porque es la que ha motivado este reproche que se me ha dirigido. Se estrañaba que un representante del pueblo viniese á sostener que es inútil una justicia de paz letrada, cuando nos va á traer baratura y prontitud en la resolucion de los asuntos.

Mas estraño es todavía la inconsecuencia suma que revela la comision.

Los señores diputados dicen: Descarguemos á los actuales seis jueces de un treinta por ciento del trabajo que tienen y los dejaremos perfectamente holgados, los dejaremos en condiciones de llenar su cometido con un setenta por ciento; y este treinta por ciento adjudiquémoslo, no á otros seis jueces, que seria cuando mas lo razonable, sino á catorce jueces.

Pero si los seis jueces llenan un setenta

por ciento de trabajo, ¿por qué se quiere poner catorce para llenar un treinta por ciento del mismo trabajo? Esto sí que es absurdo!

Sr. Posse—Si me permite una interrupcion, voy á esplicarle.

Sr. Ruiz de los Llanos—Si, señor.

Sr. Posse—Todo depende de que los jueces de primera instancia solo conocen en asuntos de trescientos pesos para arriba, y naturalmente se les rebaja un treinta ó treinta y cinco por ciento desde que á los jueces de paz se les dá jurisdiccion hasta dos mil pesos.

Tenemos, por ejemplo, que ante la actual justicia de paz, segun datos que he recogido, tramitan trescientos y tantos expedientes al año. A esos trescientos expedientes agregue el señor diputado el treinta y cinco por ciento que rebajamos á los seis jueces de primera instancia, y tendrá entonces el número de expedientes...

Sr. Ruiz de los Llanos—No comprendo absolutamente.

Sr. Posse—Los actuales jueces de paz conocen en causas hasta de trescientos pesos. Por esta ley van á entender en causas hasta de dos mil pesos. Este aumento, que importa un treinta y cinco por ciento de las causas en que conocían los jueces de primera instancia, se les viene á rebajar á estos, puesto que van á entender en causas de dos mil pesos para arriba.

Sr. Ruiz de los Llanos—Tengo la desgracia de no comprender todavía al señor diputado; y continúo creyendo que, si estos seis jueces bastan para entender en un setenta por ciento de las causas, no es razonable poner catorce jueces para entender en un treinta por ciento.

Esta es una proporcion aritmética: si seis bastan para conocer setenta, deben bastar menos de seis para conocer treinta. Esto es evidente, completamente evidente.

Entonces, yo busco cinco, aunque bastaría con tres, para que la administracion de justicia se haga muy rápidamente.

En cuanto á las cámaras intermediarias, no las rechazo porque no hayan existido nunca. Sé que han existido cámaras de paz, dadas por la constitucion provincial, aunque nunca se han puesto en práctica en los partidos de campaña; de manera que no me han tomado de nuevo.

Yo no las rechazo por eso, repito; las rechazo, simplemente, porque no veo la necesidad de tantos y complicados resortes, que traen trastornos necesariamente, que hacen que sea difícil, si no imposible, aprender el procedimiento en todas sus partes, no digo ya para las personas que han de intervenir necesariamente en estos asuntos de menor

cuantía, las cuales son legas en su mayor parte, simples procuradores, chicaneros, como ha dicho el señor diputado, sino tambien para los mismos letrados: son muchos resortes y demasiado complicados. Hagamos las cosas claras, fáciles y prontas.

Y aquí me toca aducir otro argumento mas para limitar la cantidad de mil pesos la jurisdiccion de los jueces de distrito.

Yo creo que no son necesarias estas cámaras de paz, y creyendo que no son necesarias, propongo que la apelacion de las resoluciones de los jueces de distrito sea ante los jueces de primera instancia, jueces tambien unipersonales. Entonces, como pudiera parecer grave que un juez unipersonal fuera juez de apelacion respecto de otro juez unipersonal, limitando la cantidad...

Sr. Colombres—Pero es incientífico.

Sr. Ruiz de los Llanos—Será incientífico, pero yo contesto á eso, diciendo que es perfectamente práctico.

Si actualmente hay un noventa por ciento de las resoluciones de los jueces de paz no letrados que los jueces de primera instancia confirman, cuando los jueces de paz sean letrados, ese tanto por ciento de resoluciones confirmadas, llegará á noventa y cinco.

¿Vale la pena crear un tribunal de apelacion para ese cinco por ciento de sentencias que pudiera revocarse?

Sr. Gomez—Eso probaría otra cosa al señor diputado: que los intereses de menor cuantía no están suficientemente garantidos, porque no es posible creer que sean mas infalibles los jueces de paz no letrados que los tratados.

Sr. Ruiz de los Llanos—Pero cuando los jueces de distrito sean letrados, las sentencias confirmadas no han de subir mucho de un noventa por ciento; subirán á noventa y cinco...

Sr. Posse—Economice ese cinco por ciento: suponga que todas van á ser confirmadas.

Sr. Ruiz de los Llanos—Lo economizo, hasta cierto punto, puesto que limito solo hasta doscientos pesos, porque me parece que los asuntos de menor cuantía no han de correr el albur de una revocatoria, que es muy difícil.

Por lo demás, no tiene nada de anormal que un juez de mayor categoría, para el cual se exige mayores condiciones, mayor práctica, pueda resolver en segunda instancia, confirmando ó revocando la sentencia de un juez de inferior categoría, aunque sea letrado.

Para eso me bastaría hacer esta consideracion: con toda frecuencia se presenta el caso, que no se puede evitar, de sentencias revocadas por una cámara compuesta de

tres miembros, por mayoría de dos votos contra uno.

De manera que tenemos este resultado: dos magistrados, letrados, haciendo cosa juzgada contra el pronunciamiento de un juez y de un camarista, ambos letrados también.

Sr. Colombres—Pero á la deliberacion han concurrido tres miembros.

Sr. Ruiz de los Llanos—Perfectamente; pero el resultado es...

Sr. Colombres—Son, al fin, las luces de tres letrados las que concurren.

Sr. Ruiz de los Llanos—Sí, pero uno de ellos está en contra de la opinion de los otros dos. Sin embargo, hace cosa juzgada el pronunciamiento de dos contra dos.

Y esto sucede hasta en la suprema corte nacional.

La suprema corte nacional, conociendo de sentencias de un tribunal de provincia, de última instancia, aun cuando esté compuesta de tres miembros, por impedimento ó escusacion de los otros, puede, siendo corte legal con tres miembros, revocar sentencias que tengan á su favor la opinion de diez ó de doce votos, si ha recorrido las tres instancias de la justicia provincial. Y puede dictar resolucion por dos votos contra uno, siendo ella legal.

Sr. Colombres—Eso es precisamente lo que queremos para la justicia de paz: una organizacion igual á la de la justicia federal.

Sr. Ruiz de los Llanos—Creo haber demostrado que no tiene nada de anormal y de raro que un juez unipersonal conozca, en segunda instancia, del pronunciamiento de otro juez unipersonal, confirmando ó revocando sus resoluciones.

Sr. Presidente—Se va á votar el artículo en discusion, en los términos en que lo proyecta la comision.

—Resulta aprobado.

—A invitacion del señor presidente, se pasa á cuarto intermedio.

—Vuelven á sus asientos los señores diputados.

Sr. Presidente—Continúa la sesion.

—Se aprueban sin discusion los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º.

Sr. Figueroa (F. J.)—Pido la palabra.

Antes de que se pase á considerar el capítulo 2º, voy á permitirme hacer una observacion.

Creo que sería conveniente consignar en este proyecto que el puesto de alcalde debe ser gratuito, porque la comision, en un artículo posterior, determina que los jueces de

paz y los miembros de las cámaras deben gozar de un sueldo que fijará la ley de presupuesto.

Sr. Posse—La comision no ha hecho mas que aceptar las disposiciones de la ley vigente. Pero como la mente de ella es que sean gratuitas las funciones de los alcaldes, no tiene inconveniente en que se establezca así en este proyecto.

Sr. Fernandez—Pido la palabra.

Desearia saber de la comision si va á proponer la creacion de los puestos de escribiente y de ordenanza, para cada alcaldía.

Sr. Colombres—Yo estaba resuelto á hacer la indicacion cuando llegara el momento.

Sr. Fernandez—Creo que ahora es el momento oportuno, porque se va á terminar el capítulo relativo á los alcaldes.

Sr. Ruiz de los Llanos—Tengo en mi poder la redaccion de un artículo que habia preparado para el capítulo relativo á los jueces de paz, pero que puede aplicarse perfectamente á los alcaldes.

El artículo es este: «El cargo de alcalde es obligatorio y gratuito, y nadie podrá rehusar su aceptacion sino por justa causa.»

Esto responde á la observacion hecha por el señor diputado por Córdoba.

Ahora, atendiendo la indicacion del señor diputado por Buenos Aires, podria consignarse este otro artículo: «Cada alcalde tendrá un escribiente y un ordenanza, con el sueldo que determine la ley de presupuesto.»

Sr. Colombres—Parece que la mente de la comision es que cada alcalde tenga solamente un escribiente.

Sr. Fernandez—¿No acepta la creacion del puesto de ordenanza? ¿Quien va á barrear la oficina?

Sr. Lainez—El ordenanza del juzgado de paz, desde que la alcaldía se va á instalar en la misma casa.

Sr. Figueroa (F. J.)—Yo creo que sería mas conveniente, para evitar contradicciones, que se reformara el art. 5º, que dice: «Los alcaldes actuarán por sí solos en los asuntos de su competencia, y para la ejecucion de sus resoluciones, notificaciones y demas diligencias, se servirán del oficial de justicia del juzgado de paz de su seccion.»

Sr. Ruiz de los Llanos—Ese artículo no obsta á que los alcaldes tengan escribientes, á quienes dicten sus resoluciones.

De manera que no puede existir contradiccion entre uno y otro artículo.

Sr. Fernandez—Yo propongo que cada alcalde tenga tambien un ordenanza.

Sr. Presidente—Desearia saber si es aceptado este artículo que se encuentra en el proyecto del señor diputado por Salta, dis-

poniendo que debe ser gratuito y obligatorio el empleo.

Sr. Colombres—Lo acepto en nombre de la comision.

Sr. Mansilla—Pido la palabra.

Como en una discusion de esta naturaleza todos podemos opinar, yo voy á observar que, no siendo electivo el cargo de alcalde, me parece que debe ser rentado.

Esta es la buena doctrina.

Hacer obligatorio un empleo que debe tomar una gran parte de tiempo á un ciudadano, es una servidumbre que no veo por qué razon se ha de imponer.

Asi es que yo creo que es mejor que estos alcaldes tengan un sueldo y que con este sueldo ellos paguen el escribiente y el ordenanza, si lo necesitan; pero dotarlos de un escribiente, es darles un tinterillo que vá á contribuir á revolver lastimosamente todos los asuntos; mientras el ordenanza será una especie de celador á quien todos van á temer.

Esto no dará mas resultado que complicar la justicia.

El asunto no vale la pena de detenerse. Ha andado bien hasta ahora el país con los alcaldes sin escribiente y sin ordenanza, y andará mejor si el alcalde es pagado.

Parece que hay mucha division entre los señores diputados, al respecto.

Sr. Figueroa (F. J.)—Pido la palabra.

Yo creo que es conveniente que en la ley se consigne si debe ó no ser rentado este cargo.

En mi opinion debe ser gratuito, por las funciones que á él corresponden; pero tambien estoy en contra de que sea obligatorio. Creo que nosotros no debemos ser demasiado pródigos en materia de cargas públicas. Recuerdo que cuando se trató de la ley municipal, se propuso tambien esto mismo.

Me parece que basta con dejar como cargas públicas las que están consignadas en la constitucion; no debemos recargar á los ciudadanos con estos puestos gratuitos y obligatorios, creados en cada ley que se dicta.

Sr. Mansilla—El juez de paz ¿es pago?

Sr. Figueroa (F. J.)—Sí, señor.

Sr. Mansilla—¿Por qué razon no ha de ser pago tambien el alcalde?

Figueroa (F. J.)—Yo no hago cuestion sobre si debe ser ó no rentado. Para mí, lo principal es que no sea obligatorio el cargo.

Sr. Mansilla—Yo creo que es mejor el magistrado pago que el gratuito, porque es mas fácil comprar á un magistrado que no tiene sueldo, que al que lo tiene.

Sr. Figueroa (M. A.)—Pido la palabra.

Creo que debemos designar tambien el

tiempo que ha de durar el alcalde en sus funciones.

Sr. Presidente—Hago presente al señor diputado que está en discusion solamente el artículo que se ha leído.

Sr. Figueroa (M. A.)—Es que yo creo que podía agregarse á él: «durará un año (ó dos, segun se estime conveniente) en sus funciones.»

Sr. Presidente—Muy bien; tome nota de la agregacion el señor secretario.

Sr. Calvo—Pido la palabra.

Me voy á oponer á este artículo, señor presidente, basado en muy breves razones, que voy á esponer.

En primer lugar, si el alcalde ha de ser, como se quiere que sea, un juez de cantidades mínimas, necesita una pieza para dar audiencia, necesita papel, necesita gastos, necesita tiempo; y hacer el cargo obligatorio, no es facilitar la justicia, á mi entender, porque, no siendo retribuido, no es probable que el alcalde dé el tiempo necesario para que tengan lugar esas pequeñas discusiones entre la clase pobre; discusiones que tienen una inmensa importancia social, por cuanto al concluir las allí, tal vez se evita mas de un crimen. Muy frecuentemente estamos leyendo en los diarios relaciones de disputas que principian por cuestiones de diez ó doce pesos y que acaban á puñaladas.

Creo, pues, que no es bien pensado establecer, con carácter gratuito y obligatorio, alcaldes que están precisamente encargados de resolver las cuestiones que se promueven entre las gentes mas incultas, menos letradas, cuestiones que, por lo mismo, siempre son las mas difíciles de entender y de arreglar.

El alcalde, á mi juicio, debe tener un sueldo proporcionado á su quehacer, al tiempo que pierde, al número de causas que resuelve.

No hay derecho tampoco para imponer á un ciudadano la obligacion de ser alcalde, cuando no tiene ganas de serlo. ¿Por qué, dirá él, se me ha de imponer esta contribucion de tiempo y de dinero, y no al vecino?

Sr. Mansilla—Es como si nos obligaran á ser diputados.

Sr. Calvo—Yo votaré, pues, en contra por las razones que he enunciado.

Sr. Posse—Pido la palabra.

Para manifestar que estoy de acuerdo con las ideas que acaban de vertirse en cuanto á que no debe ser obligatorio este cargo. Creo que así lo establece la constitucion al declarar que nadie está obligado á aceptar cargos públicos.

No me parece aceptable la idea de rentar los alcaldes, por una razon convincente: dada la jurisdiccion tan reducida que desempe-

fian, habría que asignarles, en todo caso, una renta sumamente moderada.

Sr. Calvo—Muy moderada.

Sr. Posse—Y desde luego, señor, una persona que, por el aliciente de esta mezquina renta, aceptase el desempeño del puesto, argüiría muy poco en su favor.

Sr. Calvo—El objeto sería este: que tuviera para comprar plumas, papel, una mesa, cuatro sillas, y pagar un cuarto de diez pesos, por ejemplo.

Sr. Posse—Voy á satisfacer al señor diputado.

Decía que el que aceptase el cargo por interés de remuneración tan mezquina, ya daría una prueba muy desfavorable de su carácter, mientras que cuando se admite el cargo gratuitamente, se revela que es por el deseo noble de prestar un servicio desinteresado al país.

La comisión había pensado, y aun escuchó la opinión del señor ministro en este sentido—que los juzgados de paz funcionarían en el mismo local que las alcaldías, para facilitar así á los individuos que van en busca de la justicia, el acceso á cualquiera de las oficinas donde se la administra; y, como es natural, estos alcaldes han de ser provistos, como lo desea el señor diputado, de papel, tinta y demás útiles de oficina.

Entonces, yo propondría un artículo en estos términos—y pido al señor secretario tome nota para el caso de que sea rechazado el que está en discusión: «El cargo de alcalde será gratuito y durará un año.» Y en otro inciso: «Cada alcalde tendrá un escribiente.»

Sr. Colombres—Lo último está ya sancionado.

Sr. Presidente—El señor secretario va á leer el artículo propuesto por los señores diputados por Salta y Tucumán.

—Se lee: «El cargo de alcalde es obligatorio y gratuito. Nadie podrá rehusar su aceptación sino por justa causa.»

Sr. Ruiz de los Llanos—Parece que el señor presidente entiende que yo he propuesto este artículo, y no es así: yo he dado únicamente la forma.

Sr. Colombres—Entonces, la comisión hace suya esa forma, señor presidente, suprimiendo únicamente la palabra *obligatorio*.

Sr. Posse—Podría quedar el artículo en esta forma: «Los alcaldes durarán un año en el ejercicio de sus funciones y las desempeñarán gratuitamente.»

—Se vota en esta forma y es rechazado.

Sr. Mansilla—Yo propondría que se redactara el artículo por la comisión, teniendo en cuenta la observación hecha por mí: que el cargo de alcalde sea rentado. Es decir, dejar la misma redacción del señor diputado por Córdoba, en su primera parte, agregándole: *y gozarán del sueldo que les asigna la ley de presupuesto.*

Sr. Calvo—Quiero hacer constar que cuando voté por la gratuidad del empleo, no fué de acuerdo con mi conciencia, sino con mi oído, que es más torpe que la otra.

Voy á votar ahora porque el empleo sea rentado.

Sr. Luro—Creo que sería mejor alternar la proposición, diciendo: «Los alcaldes durarán un año en el desempeño de sus funciones, y gozarán del sueldo que les asigne la ley de presupuesto.»

Sr. Tagle—Pido que se vote hasta donde dice: «ejercicio de sus funciones.»

Sr. Lainez—Desearía saber si el señor diputado quiere que se vote por partes, porque va á oponerse á que no sean rentados.

Sr. Tagle—Me voy á oponer á que tengan sueldo.

Sr. Lainez—El señor diputado pretende, entonces, de una manera extraviada, que la cámara vote dos veces la misma cosa.

No se puede votar si han de ser rentados ó no. Para eso sería necesario una moción de reconsideración.

Sr. Tagle—Todo artículo que entra en reemplazo de otro, se vota por partes.

Sr. Lainez—Hago notar esa inconsecuencia.

—Se vota la primera parte: «Los alcaldes durarán un año en el ejercicio de sus funciones», y se aprueba. La segunda parte: «y gozarán del sueldo que les asigne la ley de presupuestos», se rechaza.

Sr. Fernandez—Ahora debe votarse lo referente al escribiente y al ordenanza.

—Se lee: «Cada alcalde tendrá un escribiente con el sueldo que le asigne la ley de presupuesto.»

Sr. Fernandez—Y un ordenanza.

Sr. Lainez—Se podría rectificar la votación anterior. Porque no me explico esta inconsecuencia de la cámara: acaba de votar que los alcaldes deben ser rentados, y á renglón seguido, sin moción de reconsideración, porque no equivale á moción de reconsideración la indicación subrepticia del señor diputado, pretendiendo hacer votar dos veces el mismo artículo, declara que no deben tener sueldo.

Es preciso que lo tengan ó no lo tengan, para lo cual hay que resolver de una manera ú otra. Por eso pido que se rectifique la votacion.

Sr. Presidente—Hago presente al señor diputado que ha sido sancionado el artículo en la forma de que se ha dado cuenta.

La cámara, en su primera votacion, dió una sancion negativa.

Sr. Lainez—Por esto mismo pido que se rectifique la votacion.

Sr. Mansilla—La cámara, implícitamente, aceptó el principio, desde que votó en contra de la gratuidad del empleo.

Sr. Figueroa (F. J.)—Importa esto: que la cámara declara que no hay necesidad de consignarlo en la ley.

Quedan los alcaldes en las condiciones actuales.

Sr. Ruiz de los Llanos—Entiendo que se ha pedido en tiempo que se rectifique la votacion.

Sr. Presidente—No hay inconveniente; se rectificará: si se acepta ó no la segunda parte: «y gozarán del sueldo que les asigne la ley de presupuesto.»

—Se rectifica la votacion, y el señor secretario proclama nuevamente negativa de 25 votos contra 22.

Sr. Lainez—Creo que se han puesto de pie veinticuatro diputados.

Sr. Secretario—Veintidos, señor.

Sr. Lainez—Que se pongan de pie los de la negativa.

—Se hace así.

Sr. Secretario—Resultan ahora veinticuatro por la negativa. Y con el señor Solá, que había votado antes en ese sentido, son veinticinco.

Sr. Mansilla—Entonces, ¿quedan sin sueldo los alcaldes?

Sr. Presidente—Quedan sin sueldo.

Sr. Secretario—El artículo ha quedado sancionado así: «Los alcaldes durarán un año, en el ejercicio de sus funciones.»

Ahora está en discusion el siguiente: «Cada alcalde tendrá un escribiente con el sueldo que le asigne la ley del presupuesto.»

Sr. Presidente—El señor diputado por Buenos Aires había propuesto que se incluyera un ordenanza tambien.

Se votará despues de sancionado el artículo.

—Se vota si se aprueba ó no el artículo en discusion, y resulta afirmativa.

—Se vota el agregado propuesto por el señor Fernandez: y «un ordenanza» siendo rechazado.

—En discusion el artículo 7º.

Sr. Figueroa (M. A.)—Deseo saber de la comision cual es el número de secciones en que está dividido el municipio.

Sr. Colombres—Catorce.

Sr. Figueroa (M. A.)—Voy á proponer á la comision la variacion de algunas palabras, porque puede ser que mañana convenga aumentar el número de secciones ó dividir las actuales.

Propongo que se modifique el artículo en esta forma: «Habrá un juez de paz en cada una de las secciones en que *está* dividido el municipio», etc, en vez de *está*.

Sr. Colombres—La comision ha creído bastante por el momento, y respondiendo á los aumentos de poblacion que pudieran venir en algunos años, el número de catorce jueces.

Sr. Posse—Pido la palabra.

Para mejor inteligencia, debería agregarse, despues de la palabra *secciones*, la palabra *parroquiales*.

Propongo esta modificacion á nombre de la comision.

—Es aprobado el artículo con la modificacion propuesta por el señor diputado Posse.

—En discusion el artículo 8º.

Sr. Lainez—Pido la palabra.

Para proponer una modificacion que no es sino de forma; en vez de decir *título universitario*, que se diga: *título de las universidades de la nacion*.

Sr. Ruiz de los Llanos—Título universitario nacional.

Sr. Lainez—Eso es.

Sr. Posse—No hay inconveniente por parte de la comision.

—Se dá por aprobado con la modificacion indicada.

—En discusion el artículo 9º.

Sr. Ruiz de los Llanos—Pido la palabra.

Habiendo pasado ya el artículo 7º, que establece que haya catorce jueces de paz letrados, y plenamente convencido de que es demasiado este número, creo que para que no sea tan escetivo, para que no estén tan holgados, para que tengan realmente trabajo, debemos aumentar su competencia hasta cuatro mil pesos, en vez de dos mil pesos.

Porque no concibo para que habrá estos catorce jueces de paz letrados, si han de atender solamente un treinta por ciento de los asuntos que son bien atendidos ahora por solo seis jueces.

Y no concibo tampoco cómo habría dos cámaras de apelacion, (que van á pasar tambien, puesto que ha pasado el artículo 1º

que las establece) cuando en mi opinion, no tendrán qué hacer, desde que actualmente bastan dos cámaras para conocer de todos los asuntos, sin limitacion de jurisdiccion, é incluso los criminales, que nada tendrán que hacer con esta justicia de paz.

• Por esto creo que debe aumentarse á cuatro mil pesos su competencia, no solamente en el inciso 1º del artículo 9º, sino en todos los que sean relativos.

Sr. Posse—La comision no acepta, por que la cree innecesaria, esta modificacion, dado el estudio que ella ha dedicado á este asunto y los datos estadísticos de que se ha servido.

El señor diputado opina que los jueces de paz no van á tener mas causas en que entender que el treinta y cinco por ciento que se va á disminuir á los jueces de primera instancia. Pero olvida trescientas y tantas causas que tiene cada uno de los jueces de paz actualmente, cuando su jurisdiccion no llega mas que hasta trescientos pesos. Ahora bien, como son veinte estos funcionarios actuales, limitando á trescientos el cálculo de las causas en que entienden, nos daría seis mil causas cuyo valor no escede de trescientos pesos; mas el treinta y cinco por ciento de las causas que se va á disminuir á los jueces de primera instancia, dá un total, para estos funcionarios, de mas de ocho mil causas.

Antes habia hecho otra observacion, que es muy digna de tenerse en consideracion, y es el rápido crecimiento de esta ciudad, su desenvolvimiento comercial, que es asombroso y que haría necesario, á cada paso, aumentar el personal de los jueces.

Hay, ademas, otra razon bastante fundamental que la comision ha tenido en cuenta, al establecer este limite de dos mil pesos.

No solamente ha hecho el cálculo del número de causas que se tramitan por todos los tribunales, para dejarlas equitativamente repartidas, sino que ha establecido un procedimiento diferente para la justicia de paz: el procedimiento verbal y actuado, breve y rápido.

Ahora están los habitantes de la capital bajo el dominio de una ley en que hay algo y mucho que asombra. Una causa por trescientos pesos está sometida á la misma larga dispendiosa tramitacion que otra por un millon de pesos, y gasta el mismo papel.

Haria notar los innumerables casos de que he tenido conocimiento cuando tuve el honor de pertenecer á la admistracion de justicia.

Recordaré uno.

Se discutía la medianeria de una pared en la calle Alsina. La pared tenía cinco va-

ras de largo y era hecha en barro. Se hizo un expediente de doscientas y tantas hojas, cuyo solo papel sellado costó mas de cien pesos; intervinieron 4 maestros mayores, en varias inspecciones oculares, y uno solo de ellos, un señor Moreno, cobró 160 fuertes, quedando el honorario de los otros tres sin regularse, y á mas los honorarios de los abogados y las costas del escribano,—todo por una pared de cinco varas, que ni se discutía por entero, sino solamente por la medianeria.

Otra pobre mujer trataba de hacerse declarar heredera. Se acabó todo el haber hereditario, y los abogados y procuradores la seguían demandando por un exceso de honorarios que no les habia pagado.

Son, pues, estas cosas algo que realmente asusta, que desacredita á la justicia, al foro, al país; y la comision ha creído deber reformatarlas haciendo que la justicia, en las cuestiones por pequeñas sumas de dinero, sea barata y pronta.

Por lo demas, señor presidente, la comision se felicita de que el señor diputado por Salta, que ha sido su impugnador, reaccione en el sentido de querer ampliar mas todavia la jurisdiccion de los jueces de paz.

Sr. Ruiz de los Llanos—No reacciono; acepto la sancion de la cámara, cumpliendo con mi deber. No tengo el derecho ni la pretension de sublevarme contra ella.

No he impugnado el número de jueces de paz, porque para mí tiene mucha importancia en este caso.

Es preciso no olvidar que los jueces de paz tienen funciones adheridas á cada seccion parroquial; de manera que si se establecen jueces de paz letrados, tienen que ser catorce porque deben desempeñar sus funciones en cada una de ellas. No he querido, repito, sublevarme contra la resolucion de la cámara: la acato y respeto.

El señor diputado, contestando á la objecion que yo hacia al quantum de la jurisdiccion de los jueces letrados, vuelve á insistir en un punto que yo no habia comprendido bien la primera vez que lo espuso; por eso no contesté.

Nos decía: No solo es el treinta por ciento (el señor diputado decía tambien el treinta y cinco por ciento) de los asuntos en que conocen, por la ley, los jueces de lo civil y comercial, lo que vá á ser atribuido á estos jueces de paz; va á atribuírseles, además, el conocimiento de todos aquellos en que conocen los actuales jueces de paz, que representan trescientos expedientes.

Confieso que no he tenido informes respecto al número de expedientes. A primera vista, me parece que es excesivo el que se señala, pero admito que sea exacto.

Me parece que podríamos tambien incluirlo en el tanto por ciento, y que no representaría un diez ó quince por ciento; pongo un quince, y admito el treinta y cinco que mencionaba el señor diputado, y entónces tenemos un cincuenta por ciento de los expedientes en que conocen los jueces de primera instancia, que van á ser atribuidos á los jueces de paz.

Y si seis jueces eran bastantes, (sin estar recargados, como reconocen y saben todos los señores diputados que abogan,) para conocer en todos los asuntos, sin limitacion, me parece que catorce van á ser mas que suficientes para conocer en un cincuenta por ciento, y por eso creo que debe aumentarse la estension de su jurisdiccion.

Por otra parte, no tengo mucha fé en la eficacia del procedimiento verbal y actuado. No sé hasta qué punto sea posible.

Actualmente, los jueces de paz que no conocen sinó en asuntos que excedan de trescientos pesos, no siempre proceden así; por el contrario, la regla general es que se forme expedientes, que tienen forzosamente que hacerse con gasto de papel sellado. Se hacen expedientes porque se hacen incidentes.

Estando el juzgado á cargo de un juez letrado, probablemente se observará mejor la regla, y entónces no se sujetarán al procedimiento verbal y actuado.

Pero ¿es conveniente sancionarlo? Me parece dudoso.

Es muy laudable el deseo de ahorrar gastos de papel sellado á los litigantes por pequeñas sumas; pero es sabido que los juicios verbales celebrados en primera instancia son por lo general de ningun resultado; á tal punto, que no se efectúan ya ante los jueces mismos; se simulan, diré así, se presenta una esposicion, por cada parte, que entregan al secretario, el que labra un acta que firma el juez. Cuando los juicios verbales se realizan, son mas largos, mas dispendiosos, mas enojosos que los escritos que se presentan ante un juzgado.

En los asuntos en que hay mas de dos interesados, esos juicios tienen multitud de inconvenientes.

Pero por ahora prescindo de este punto; y sostengo que, siendo, por resolucion de la cámara, (contra la cual no puedo decir nada) catorce los jueces de paz, deberíamos darles un poco mas de trabajo, no limitando sus funciones á dos mil pesos.

Desde que la comision no lo admite, yo pediría que se votara aisladamente la cifra que marca el límite de la jurisdiccion.

Sr. Luro—Pido la palabra.

Desearía que la comision me explicara

el alcance de las últimas palabras del inciso 2º: «Cuando no medie contrato escrito ó si habiéndolo, el valor del contrato no excediese de dos mil pesos.»

¿Es el importe del alquiler mensual, ó la totalidad de cuotas periódicas?...

Sr. Colombres—El valor total.

Sr. Posse—Este artículo es exactamente igual al de la ley vigente.

Por mi parte, entiendo que en las obligaciones de pago sucesivas se toma el término medio.

Sr. Ruiz de los L'anos—Me parece que el señor diputado sufre una equivocacion; la ley vigente dice «el valor litigado.»

Sr. Colombres—Es cierto.

Sr. Ruiz de los Llanos—Y la sancion del senado dice igualmente: «el valor litigado.»

Yo tambien iba á observar este inciso.

No puede ponerse el valor del contrato, entendido como parece que lo entiende el señor diputado miembro de la comision, porque entónces resultaría que un contrato en que el alquiler mensual fuera de cien pesos, (caso muy frecuente) á los dos años pasaria de la suma; de manera que los jueces de paz no podrían conocer sino en aquellos en que el alquiler fuera insignificante.

Sr. Luro—Sería mejor dejar este inciso como el anterior: «De las demandas por desalojo, cualquiera que sea la importancia del alquiler, cuando no medie contrato escrito; y si hay contrato escrito, cuando el alquiler no exceda de...»

Sr. Colombres—Perfectamente.

Sr. Ruiz de los Llanos—Yo iba á proponer lo siguiente: «De las demandas por desalojo, cualquiera que sea la importancia del alquiler cuando no medie contrato escrito, ó cuando habiéndolo el valor litigado no exceda de mil pesos.»

Sr. Luro—Yo propongo «el alquiler mensual de cien pesos.»

Sr. Colombres—Votemos por partes.

Sr. Calvo—Pido la palabra.

Sobre el inciso 1º yo deseaba hacer una breve observacion á la cámara; y es la siguiente:

Dice aquí ... «y en los juicios sucesorios ó de concurso de acreedores». Ahora, segun el artículo 67, inciso 11 de la constitucion, (atribuciones del congreso) el congreso debe dar una ley uniforme de bancarrota.

Estos tribunales, no sé hasta que punto pueden ó nó calificarse de tribunales federales, aun cuando están en la capital; y si la ley de bancarrota es uniformemente nacional, los jueces competentes son los tribunales federales, los jueces federales.

Sr. Ruiz de los Llanos—El código civil legisla sobre eso.

Sr. Calvo—Yo no me estoy fijando en lo que relativamente al código se dice, sino en una diferencia que tiene la legislación de donde hemos tomado nuestro modelo, que es la de Estados Unidos. Sobre la ley de bancarrota legisla la nación; sobre la insolvencia, las legislaturas de los estados. Y aun cuando es una distinción tan tenue que quizá no se apercibe á primera vista, estudiando el punto se la encuentra.

Ahora bien; para mí es una deuda, sobre la cual desearía una explicación, para formar mejor mi juicio, si estos tribunales, que son simplemente locales, pueden hacerse cargo de juzgar la bancarrota, que es un asunto eminentemente federal, de mi punto de vista.

Aun cuando el código civil se ocupa de la bancarrota, no está de acuerdo con la disposición constitucional, porque, al dictar nosotros un código para la República entera, hemos tomado un procedimiento verdaderamente centralista y unitario, que no está en el espíritu de nuestra constitución.

Yo reclamo de la comisión una pequeña explicación, porque reconozco que el punto es superior á los que yo puedo creerme competente para resolver, y como lo encuentro complicado, deseo oír la para votar con conciencia.

Sr. Colombres—Creo que la duda que formula el señor diputado es muy fácil de disipar.

En efecto, el inciso 11 del artículo 67 de la constitución, dá al congreso la facultad de dictar la ley general de bancarrota; pero la aplicación de esa ley no corresponde á la justicia federal sino á los tribunales de cada provincia.

De manera que, tratando de organizar nosotros los tribunales de la capital, actuando el congreso como legislatura local, bien se puede atribuir á la justicia de paz el conocimiento de esos asuntos, sin afectar en nada á la constitución, que, ya digo, se limita á dar al congreso la facultad de dictar la ley general de bancarrota. Lo que no sucede por regla general; se ha consignado, porque es una derogación del principio general, pues las leyes de forma corresponden á las legislaturas provinciales; y, como una excepción, se ha dado al congreso la facultad de legislar el fondo y la forma en materia de quiebras. Sin embargo, como he dicho antes, la aplicación de la ley corresponde á los tribunales de provincia.

Sr. Calvo—No estoy conforme respecto á la jurisdicción local federal; al contrario, ella está perfectamente definida en la constitución nuestra y en todas las constituciones que nos han servido de modelo.

Yo dije, hace un instante, y repito ahora, porque es indispensable hacerlo, que la ley de bancarrota, que es de legislación del congreso en Estados Unidos, no impide que tenga efecto la ley de insolvencia, que cada uno de los estados dá, según sus conveniencias; y cuando se encuentra en conflicto una ley con otra, predomina la ley nacional de bancarrotas.

Este artículo merece una atención especial de la cámara, porque si bien, por la constitución, el congreso está habilitado para dictar los diversos códigos, al terminar el inciso dice ella que no solamente dictaremos la ley uniforme de naturalización, sino que haremos la ley uniforme de bancarrota; lo que claramente importa establecer una contradicción con lo que hemos hecho.

Si se alega, como se ha hecho aquí, que hemos legislado con relación al código y que en una parte de él existe la ley de bancarrota, mas ó menos completa, está bien; pero esto no destruye la prescripción constitucional misma, en el artículo citado, que manda hacer la ley especial de bancarrotas.

Ahora, en medio de esta duda, no me parece prudente que nosotros, no diré por imprevisión, pero sí en una forma que no es perfectamente correcta, dada la falta de ley de bancarrota y la falta de ley de insolvencia por parte de las provincias; sancionemos esto que falsea el procedimiento.

Yo no veo la necesidad de consignar estas palabras, contra las cuales votaré, puesto que la comisión no las retira: *ó de concurso de acreedores*.

No hay objeto, para mí, en acordar á esos jueces de paz en el nombre, municipales en el hecho, puesto que van á juzgar con relación al territorio de cada parroquia, una función que es eminentemente federal, bajo el punto de vista encarado en el artículo, aun cuando sea provincial bajo el punto de vista de la insolvencia, que ya he mencionado también.

Deseo que se vote por partes, porque no voy á votar por esta que se refiere á los concursos de acreedores, como facultad acordada á los jueces de paz creados por esta ley.

Sr. Posse—Pido la palabra.

Voy á dar una breve explicación, que creo convencerá al señor diputado.

Aun en el caso de que, efectivamente, perteneciese á la jurisdicción federal el conocimiento de los juicios de concurso, como no ha dictado el congreso todavía la ley de bancarrota, no puede invocarse esa jurisdicción. Esta cuestión podrá hacerla el señor diputado cuando el congreso dicte esa ley.

Además, quiero hacer un recuerdo al señor diputado.

En la ley sobre jurisdiccion y competencia de los tribunales federales, está espresamente establecido que los jueces federales no son competentes para conocer en los juicios universales, de testamentaria y de quiebra. De manera que en una ley que el congreso ha sancionado, espresamente declara que los asuntos de quiebra no son de competencia federal.

Esto era simplemente lo que queria manifestar.

Sr. Calvo—La ley seria inconstitucional.

Sr. Ruiz de los Llanos—Pido la palabra.

Para observar al señor diputado que, hablando con propiedad, la ley de bancarrotas está dictada ya, puesto que está dictado el código de comercio que rige en toda la República, y están legisladas las quiebras comerciales, que son las bancarrotas.

Pero aun cuando así no fuera, no hay inconveniente para sancionar este artículo. Las bancarrotas no pueden ir nunca á la justicia federal, porque está establecido claramente en un inciso del artículo 67 (atribuciones del congreso), que éste debe dictar el código civil, comercial, etcétera, sin que esto altere la jurisdiccion de las provincias, correspondiendo entónces el conocimiento á la jurisdiccion de los juzgados nacionales ó provinciales, segun las personas.

Y como está establecido ya, y lo ha dicho el señor diputado por Córdoba, que los jueces federales no pueden conocer en los juicios universales, y se llaman tales los juicios testamentarios y de concurso, resulta que nunca podrán conocer de estos asuntos, y que están perfeitamente atribuidos aquí á la justicia local de la capital.

Sr. Calvo—Yo no creo que sea muy pertinente ocuparnos aquí de la discusion constitucional; pero como á este respecto mis opiniones no están conmovidas, desearia que se votara por partes, para votar en contra de lo que he indicado.

Sr. Figueroa (F. J.)—Pido la palabra. Hago mocion para que se levante la sesion.

—Apoyado.

Sr. Presidente—Antes de hacer votar esta mocion, creo de mi deber manifestar que en la sesion próxima debe procederse á la eleccion de presidente y vices de la cámara, de acuerdo con el artículo 34 del reglamento.

Sr. Ruiz de los Llanos—Podria votarse el artículo que ha estado en discusion.

Sr. Presidente—Habiendo sido suficientemente apoyada la mocion del señor diputado por Córdoba, se vá á votar.

—Es aprobada, levantándose la sesion á las 5 y 45 p. m.